



**observatorio
de racismo**
EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN BAJA CALIFORNIA

Ante los reprobables incidentes de narcoterrorismo registrados el pasado fin de semana en cuatro municipios de Baja California: Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada, hacemos un llamado a la reflexión y acción.

Actos de violencia en los estados de Jalisco, Chihuahua y Guanajuato comprueban que lo ocurrido en diversos puntos de Baja California no son casos aislados, sino la más clara expresión de la situación que se vive en México en materia de inseguridad; Ciudad Juárez punto fronterizo receptor de miles de personas en contexto de movilidad, fue testigo de una violencia que escaló y arrebató la vida a 11 personas.

La zona centro de Tijuana, en donde se localizan albergues y organizaciones que atienden a personas en contexto de movilidad, fue uno de los puntos focalizados de actos violentos por parte del crimen organizado; a las afueras de las instalaciones de Espacio Migrante y de la clínica de Refugee Health Alliance se presenció el incendio de un automóvil, que fue registrado en video y viralizado en las redes sociales.

Tijuana no es una ciudad segura, y mucho menos para las personas en contexto de movilidad, desplazadas y obligadas a dejar sus ciudades y países de origen a causa de la violencia que hoy experimentan nuevamente en territorio tijuanaense, evidenciando la incapacidad del Gobierno en sus tres niveles para actuar y brindar seguridad a connacionales y extranjeros.

Los albergues de la sociedad civil están trabajando al máximo de sus capacidades, sobrepasados al absorber la carga pública que al Estado corresponde. Lo anterior se traduce en albergues sin cupo y, por lo tanto, en más población migrante racializada en situación de calle, lo que agrava y expone de sobremanera a estas personas colocándolas en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo inminente.



Alzamos la voz ante la respuesta de las autoridades. El Gobierno Federal de México tomó la decisión de enviar a 300 elementos del Ejército y Guardia Nacional a Tijuana para hacer frente a esta ola de violencia. A nivel municipal, el gobierno tijuanaense desplegó el cuerpo policial, lo que sin lugar a dudas representa una mayor militarización de la frontera. Advertimos que esto se traduce a un campo de cultivo para nuevas y terribles perpetraciones de abusos e incremento de la violencia

Resaltamos que las detenciones arbitrarias son también perpetradas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en conjunto con la Guardia Nacional, violando sistemáticamente los Derechos Humanos de las personas en contexto de movilidad al detenerlas mientras viajan en autobús por el territorio nacional mexicano o transitan por la vía pública, incluso si cuentan con los documentos migratorios que les permiten hacerlo en libertad y legalidad.

No admitimos bajo ninguna circunstancia las voces sin fundamento que argumentan que las personas migrantes se encuentran en la misma posición sobre su seguridad y derechos como el resto de la población. Las personas en movilidad debido al racismo y la xenofobia se encuentran en una situación de vulnerabilidad diferenciada.

La comunidad migrante ha sufrido acoso y violaciones a sus derechos humanos por parte de la policía, el INM y de la Guardia Nacional, quienes constantemente utilizan el perfilamiento racial para la criminalización y detención de personas en contexto de movilidad, a quienes agreden física y psicológicamente, además de privarlas de sus pertenencias y documentos de identidad. Lo anterior tiene un efecto particularmente negativo en la población migrante con doble vulnerabilidad al identificarse como persona afrodescendiente, indígena, morena o miembro de la comunidad LGBTIQ+.

Observamos con preocupación también la militarización y patrullaje de la zona que agrava lo descrito anteriormente y por ende, **exigimos al Gobierno de México en todos sus niveles, poner un alto a las detenciones arbitrarias y al perfilamiento racial, a respetar los Derechos Humanos y a garantizar la seguridad de todas las personas con independencia de su nacionalidad.**

Subrayamos que es intolerable e insostenible que el Gobierno de Estados Unidos continúe con las expulsiones bajo Título 42 bajo el argumento de salud pública, pues esta política expulsa a las personas sin tomar en cuenta sus necesidades de protección. Una estrategia cruel de los gobiernos de Estados Unidos y México para contener la migración.

Mientras que tras el anuncio del fin del Protocolo "Quédate en México", política que obligaba a las personas solicitantes de asilo a esperar sus procesos del lado mexicano, pedimos a los gobiernos de Estados Unidos y México a facilitar el ingreso de las personas solicitantes de asilo puestas bajo MPP lo antes posible, a generar mecanismos para que aquellas que estuvieron puestas en esta política durante la primera fase puedan acceder a sus procesos sin importar donde se encuentren actualmente; y al gobierno de México a dejar de colaborar en políticas migratorias contrarias a nuestra Constitución que ponen en peligro la vida y salud emocional de las personas con necesidades de protección internacional.

El Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, y organizaciones de la sociedad civil en Tijuana, nos pronunciamos en contra de cualquier discurso de odio hacia la comunidad migrante por los hechos violentos suscitados y hacemos un llamado a las autoridades competentes a actuar y salvaguardar la integridad de la población que se encuentra en Baja California, independientemente de su estatus migratorio.

